

## ECONOMÍA Y TRABAJO



Jubilados conversaban ayer en un banco en Madrid. / VÍCTOR SANZ

## España tiene la mitad de tasa de empleo que la UE en los mayores de 64

Los datos respaldan el discurso de Escrivá. La actividad entre las personas de más de 55 también está al alza en Europa

A. MAQUEDA, Madrid  
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, señaló el pasado domingo que hace falta un cambio cultural para aumentar la proporción de gente trabajando entre 55 y 75 años. En una entrevista al diario Ara, dijo: "Hay que hacer un cambio cultural en España. En Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Lo vemos en las tendencias internacionales: a estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más. Y España es una anomalía a nivel europeo: no solo no estamos siguiendo esta tendencia sino que incluso se

está reduciendo la proporción de mayores de 55 en activo. Yo creo que claramente hay elementos que tienen que ver con aspectos normativos. Por ejemplo, los convenios colectivos son un elemento. Pero creo que es un elemento fundamentalmente cultural".

Las declaraciones del ministro suscitaron enseguida críticas. Sin embargo, Escrivá aclaró luego en Twitter que España tiene "una edad de jubilación adecuada, que no es necesario modificar". Y añadió: "En ningún caso planteo la necesidad de trabajar hasta los 75 años como algunos sugieren, sino fomentar medidas que contribuyan a cambiar la mentalidad de

las empresas para que no expulsen a trabajadores del mercado laboral a partir de 55 años". Por este motivo, el ministro limitará la jubilación obligada por convenio, cambiará las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas y mejorará los incentivos para que quien quiera pueda trabajar más allá de la edad legal de jubilación.

Por otra parte, Escrivá prepara un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional para aliviar la presión que ejercerá sobre el sistema la jubilación del *baby boom*, la generación más numerosa. Este sustituirá al llamado factor de sostenibilidad que aprobó el PP, cuya entrada en vigor había

sido pospuesta y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Su ahorro estaba estimado en cerca de un 1% del PIB de gasto de aquí a 2050. Y ahora tendrá que diseñar otro para poder reemplazarlo. En julio apuntó que el nuevo instrumento podría implicar un pequeño ajuste o tener que trabajar más. Pero al día siguiente se retractó ante la polémica generada. Al mencionar los 75 años, Escrivá entra de nuevo en un terreno resbaladizo. ¿Hace falta según los datos incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde?

Las cifras de empleo de Eurostat respaldan el discurso del ministro. En el grupo entre 64 y 75 años, España tiene la mitad de gente trabajando que el resto de la Unión. Mientras que en el mercado laboral español el porcentaje de personas con esas edades que todavía tiene empleo es del 4,9%, en la UE se sitúa en el 9,5%. Francia se encuentra igual que España. En Alemania está en el 13%. En Italia, en el 8,9%. En Irlanda y Suecia, en el 18%. Y en Portugal en el 16%. Con el fin de mejorar estas cifras, Escrivá ha propuesto reforzar los incentivos para jubilarse más allá de la edad legal de retiro, ahora en los 66 años: en el proyecto de ley que se tramita en las Cortes plantea subir la pensión un 4% por año de morador o elegir en su lugar un pago único.

Y España también figura peor al analizar el colectivo entre 55 y 64 años. La proporción de gente con empleo en esa edad ha subido en la UE en unos 15 puntos porcentuales en una década, desde el entorno del 45% hasta casi el 60% en 2019 y 2020. Es decir, ha habido un aumento muy sustancial. En España también se ha elevado mucho pero algo menos: unos 10 puntos porcentuales, desde el 44% hasta el 54%. Es decir, la mejora se está produciendo de forma más lenta. Si se examinan los países de la OCDE, el porcentaje de población trabajando de 55 a 64 años ha crecido en casi dos décadas en más de 17 puntos porcentuales, desde el 43,9% del 2000 al 61,5% en 2018. El aumento ha sido sustancial en la República Checa, Alemania, Hungría, Lituania, Lituania, Holanda y Eslovaquia, con incrementos superiores a los 28 puntos. En países como Alemania, Dinamarca, Holanda o Suecia las tasas de empleo a estas

El ministro plantea incentivos para jubilarse más allá de la edad legal

Cuantos más mayores empleados, menos paro juvenil, dice un economista

El porcentaje de trabajadores en edad avanzada ha subido en una década

edades alcanzan o superan el 70%. En cambio, en Francia e Italia se colocan en el 54%, una cifra idéntica a la de España.

El Gobierno dice en la memoria de su reforma de pensiones que un aumento de 10 puntos porcentuales en la tasa de empleo de los mayores de 54 provocaría una reducción del gasto en pensiones del 2,7% del PIB en 2050. Sin embargo, estas cifras pueden ser discutibles en la medida en que aquel que se jubila anticipadamente sufre unas reducciones muy fuertes en la prestación que disminuyen el desembolso de la Seguridad Social. Es decir, al jubilarse antes también hay un ahorro para el sistema de pensiones.

Iñigo Errejón, diputado de Más País, argumentó ayer que las intenciones de Escrivá cercenan las perspectivas laborales de los jóvenes. Pero en los últimos 200 años ni la inmigración ni la incorporación de la mujer han quitado trabajo. "La evidencia entre las sociedades europeas es, en general, la contraria: los países con mayores tasas de empleo de la población entre 55 y 64 años tienen menores tasas de desempleo entre los jóvenes", apunta Rafael Doménech, economista del BBVA.

Puede darse el caso de que se pierda trabajo para los jóvenes en profesiones reguladas y específicas como la de bedel. Pero a nivel agregado los economistas señalan que el empleo genera más consumo y actividad. Un ejemplo: si el director Clint Eastwood se jubila, ya no contratará para sus películas.

## Hacienda destinará 3.521 millones de euros para el nuevo convenio de Muface

Unidas Podemos critica la extensión de los conciertos con las aseguradoras privadas

L. D.F. / P. C., Madrid  
Las mutualidades seguirán adelante pese a las reticencias de Unidas Podemos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha autorizado 3.521,7 millones de euros para que la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) renueve los conciertos con las aseguradoras privadas de salud durante el periodo 2022-2024. Se prevé que la propuesta del departamento dirigido por María Jesús

Montero, que plantea un aumento paulatino de las primas, llegue hoy al Consejo de Ministros.

Esta propuesta choca de lleno con la postura de Podemos, que pide acabar con las mutualidades para avanzar hacia un sistema totalmente público. El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, ha cuestionado ante Hacienda tanto la extensión de los conciertos como el incremento de las primas, que será del

8% en 2022, del 8,75% en 2023 y del 10% en 2024. La formación morada ha recordado que el acuerdo de coalición plantea la evolución hacia un sistema de atención totalmente público y lamenta que la prestación objeto de los conciertos incorpore servicios que no están incluidos en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, como 20 sesiones de psicoterapia anuales o seis consultas podológicas. El grupo parlamenta-

rio Unidas Podemos en el Congreso ya había presentado hace unas semanas una proposición no de ley para que los nuevos funcionarios se incorporen al sistema público de salud y se acabe así progresivamente con el mutualismo, alegando que "la defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas".

Muface da cobertura sanitaria

a casi 1,5 millones de personas; el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) atiende a más de 592.000 y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) a unas 91.700. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) alerta de que las tensiones políticas que genera el asunto pueden desembocar en una merma del servicio, pide mayor transparencia y añade que ve el proceso con preocupación ante las quejas por parte de las aseguradoras de que el sistema es deficitario.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) señaló recientemente que el mutualismo administrativo es insostenible debido a las condiciones deficitarias de remuneración, y defendió que ahorra cada año al sistema público entre 720 y 800 millones.